

Gana la banca ¿y Extremadura?

Ángel Calle Collado

Profesor de ecología política y agricultor en el Valle del Jerte

Ya está aquí la tercera ola de fusiones bancarias. A la unión unión de CaixaBank con Bankia y la de Unicaja y Liberbank se suma ahora la del BBVA y el Banco Sabadell. Y aunque parezca que es la política institucional interviniendo en la ordenación de un sector clave para la economía del país, más bien sucede lo contrario. Por ejemplo, la decisión de impedir que el Banco Central Europeo preste directamente a gobiernos supone en torno al 1% de comisión para los bancos privados. Eso ocurrirá con cerca del billón de euros destinados a políticas frente a la pandemia del coronavirus. Me preocupa, además, qué escenarios de impulso a proyectos industriales y de transición ecológica pueden darse para Extremadura.

En Extremadura estas intervenciones se dejaron sentir y mucho en la segunda oleada de privatización bancaria, que afectó de lleno a las cajas públicas. Las cajas de ahorro representaban un poder económico más abierto y cercano a las instituciones locales. Al calor de la especulación inmobiliaria se crearon desmanes que tiempo tuvo la política institucional de pararlos y no lo hizo. No todas, claro está, pues aquí en Extremadura tenemos el ejemplo de Caja Almendralejo. Optamos entonces por cambiar el agua de la bañera arrojando también al niño que estábamos cuidando: ¿se imaginan cerrar los hospitales en las actuales circunstancias en lugar de mejorar su servicio y su gestión democrática?

Extremadura, de ADN rural y núcleos dispersos, vio entonces como pueblos pequeños dejaban de tener un punto de acceso para trámites bancarios. En paralelo a la reducción de personal se impulsó una “digitalización” que mal casa con una región hecha de vínculos comunitarios y con una población envejecida. La Memoria del 2018 del Consejo Económico y Social de Extremadura se lamentaba de “la disminución del número de oficinas y las restricciones en el acceso al crédito”. El propio proceso de desprenderse de una herramienta pública para satisfacer negocios privados despertó agrios debates incluso en el seno del gobierno por aquel entonces. Un antiguo consejero de la Junta de Extremadura, hoy tratando de apoyar economías más verdes y circulares, llegó a decir que se había consumado “la desaparición cobarde y corrupta de las Cajas de Ahorro”.

Sólo la fusión entre Bankia y CaixaBank echará el cerrojo en 1.500 oficinas del país, buscando ahorrarse unos 500.000 millones de euros al año. Esta tercera oleada de fusiones acabará dejando el escenario bancario con apenas tres jugadores. ¿Qué papel tendrá entonces el Estado para, por ejemplo, potenciar que los agricultores y agricultoras de este país puedan diversificar cultivos, depender menos del petróleo y potenciar programas de compra pública? Algo que será necesario, no sólo por ser parte reconocida de la “economía esencial”, si no porque el sector agroalimentario tiene mucho futuro en Extremadura. Más aun con el frenazo del sector turístico y de la construcción. Bastaría apoyar con esa compra pública desde comedores y centros públicos, a la vez que se potencian industrias comarcales para la transformación.

Por el momento pues, el panorama es sombrío para Extremadura. La organización de consumidores FACUA ha sido clara al respecto: habrá menos oficinas, más comisiones y menos dinero público. Lo que uno teme es que dicho Estado abandone progresivamente cualquier intención de condicionar la política crediticia en este país. Recordemos que Extremadura se caracteriza por estar a la cola de la densidad industrial de este país. Aquí, a diferencia de otras regiones, abundan empresas de uno o dos trabajadores, hay abundancia de autoempleo y de economías informales derivadas de la

precariedad. La estructura de economía extractiva característica de Extremadura (similar a la de un campamento minero) tiene un legado histórico. Pero también como apunta el informe sobre “Actualización de la Estrategia Industrial de Extremadura 2014-2020” escrito por gobierno, una organización patronal y dos sindicatos extremeños, adolecemos de una “falta de planificación integral de las políticas dirigidas específicamente al sector industrial”. ¿Creen que las megafusiones y el fin de una banca pública nos aportará mejores escenarios? En Alemania no piensan así, y por eso mantienen un sector público activo en cada región. No tenemos por qué ser alemanes. Pero sí podríamos dedicarnos a sembrar en Extremadura poderes públicos donde el protagonismo y la utilidad fuesen netamente sociales.